

# Autonomías

## La Xunta separará a los escolares por la lengua materna

El PP denuncia un pacto entre los miembros del bipartito para implantar el monolingüismo

**Los socios de Gobierno rechazan una proposición de ley que garantizaba derechos esenciales a escolares, padres y docentes.**

**Paco Rodríguez**

MADRID- Una escuela sin garantías de equilibrio lingüístico, unos padres sin capacidad de decidir la lengua materna en la que serán escolarizados sus hijos y unos alumnos sin poder decidir libremente en qué lengua deben dirigirse a los profesores. Además, los socios nacionalistas del Gobierno pretenden incumplir dos sentencias del Tribunal Constitucional y, en los centros en los que haya más de una clase por curso, se separará a los alumnos según su lengua materna.

Esta es la realidad de los miles de alumnos y profesores de centros de enseñanza no universitaria que acaban de iniciar el primer curso escolar en el que se aplica el decreto de fomento del gallego, según denunció ayer el PP.

Los socios del bipartito podían haber cambiado el rumbo de las cosas pero ayer votaron en contra de la proposición de ley presentada por el PPdG, que pretendía una modificación del texto que incluyera una serie de garantías para padres y alumnos, que contaban con el visto bueno del Consello Consultivo.

Manuela López Besteiro, portavoz popular de Educación, instó a la Cámara a retomar el consenso que permitió aprobar por unanimidad la Ley y el Plan de Normalización Lingüística. Para López Besteiro, el decreto sobre la enseñanza del gallego se ha convertido en un tributo que el presidente Touriño se comprometió a pagar a los nacionalistas a cambio de garantizar su permanencia en el Gobierno.

Según reveló la portavoz del PPdG, meses antes de que el bipartito aprobara el decreto del gallego, la consejera del ramo, Laura Sánchez Piñón, intentó utilizar a los populares para mantener bajo control las exigencias del BNG encaminadas a implantar el monolingüismo en Galicia, a través de un modelo que se inicia en las Galescolas y que continuará a lo largo de los distintos

niveles de la enseñanza obligatoria. «Nosotros sólo queremos que la Xunta recupere el consenso lingüístico, con un decreto reformado que plasme cuatro cuestiones esenciales: garantía de que habrá un equilibrio total entre el gallego y el castellano en horas de docencia; y fijar una proporcionalidad entre las dos lenguas, del 50 por ciento cada una, sin perjuicio de poder introducir una tercera lengua extranjera», indicó.

En segundo lugar, López Besteiro reclamó la «garantía de que los alumnos puedan elegir libremente la lengua para expresarse en las aulas y en los exámenes».

**Nuevo curso, nuevos criterios** Asimismo, pidió una «garantía de que los padres serán los que determinen la lengua materna en la que serán escolarizados sus hijos en Educación Infantil, incluidas las Galescolas. Este año, han incluido varios criterios más, como una serie de estudios de la

**«Los nuevos criterios hacen perder capacidad de elección a los padres», denuncia el PP**

**El BNG quiere dejar en evidencia a los empleados públicos que no hablen en gallego**

consellería o de mapas sociolingüísticos, que le arrebatan el derecho de elección a los padres».

Por último, solicitó la «garantía de que al final de cada curso y de cada ciclo de enseñanza, los alumnos sabrán emplear las dos lenguas oficiales en Galicia».

**«Las tesis más reaccionarias»** Por su parte el bipartito acusó ayer al PPdG de rechazar el decreto del gallego en la enseñanza por haberse «alineado» finalmente con las «tesis más reaccionarias» de la dirección nacional de su partido y, por ello, recomendaron a la oposición que «mantenga la independencia frente a quien pretende instrumentalizar Galicia». Por eso, tanto para el BNG como para el PSdeG, el posiciona-



Muchos escolares deben estudiar en una lengua no materna y tienen que usarla para hablar con los profesores

miento de la oposición responde a su «alineamiento con las antiguallas del PP que dictan órdenes que obedientemente son acatadas» por el partido en Galicia, con lo que Lobeira calificó de «ofensiva brutal contra unas señales de identidad».

En su opinión, esta actitud es «difícil de entender» puesto que, según recordó, datos oficiales revelan que

el actual sistema no garantiza la competencia lingüística y que los compromisos establecidos por el Estado en la Carta Europea sobre Lenguas Minoritarias se incumplen actualmente, como apuntó un «informe demoledor» de Bruselas acerca de la pérdida de hablantes.

Por su parte, el parlamentario socialista Guillermo Meijón con-

sideró el «intento de manipular la realidad» del PP en esta cuestión «hipócrita y desvergonzado». Así, censuró la «primera falacia» en torno a la falta de atención a las recomendaciones del Consello Consultivo puesto que, según él, el texto incluyó hasta 30 modificaciones a sugerencia del dictamen y de los propios populares.

## El idioma, el más perjudicado por la polémica

Toda esta polémica está movilizándolo tanto a partidos políticos como a profesores y a padres de alumnos. Todos coinciden en que el principal problema es la imposición y que ésta sólo puede provocar rechazo entre los gallegos. Según la portavoz de Educación del Partido Popular, «el PSOE está haciendo un flaco favor al gallego si convierte la lengua en patrimonio de algunos, en instrumento ideológico de otros o en signo de identidad de unos cuantos. Esto

provoca el rechazo de la gente, en especial de los jóvenes, y lo que sale más perjudicado es el gallego». Según recordó López Besteiro, durante todos los años de los gobiernos del PP ha habido una convivencia pacífica de ambas lenguas, sin problemas. «Los que nos conocen saben que cuando hablamos entre nosotros lo hacemos en las dos lenguas a la vez. Ahora, la gente, sobre todo profesores y alumnos, se sienten vigilados porque hay interés de los nacionalistas en dejar en

evidencia a los cargos públicos que no se expresen en gallego». Los profesores y las asociaciones de padres de alumnos se han agrupado en varias asociaciones como «Tan gallego como el gallego» y «Galicia Bilingüe». Entre ambas han reunido más de 20.000 firmas en contra del decreto. Estas dos organizaciones defienden el derecho de los padres a elegir la escolarización en la lengua materna de sus hijos y a que se expresen en la proporcionalidad del idioma en la docencia.